

ESPÍRITU ANTIEUROPEO DEL PACTO ENTRE PSOE Y JUNTS.

Las asociaciones cívicas españolas que convocamos la concentración de Cibeles18N en la que se dieron cita más de un millón de ciudadanos hemos presentado una denuncia ante la Comisión de Peticiones del PE por la aprobación de una ley de amnistía que vulnera el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, invalida la acción de los Tribunales de Justicia y otorga impunidad a los delincuentes a cambio de sus votos. Hoy queremos también señalar el espíritu antieuropeo y contrario con los valores europeos, incluido el estado de derecho, del pacto suscrito entre los socialistas españoles y el partido ultra nacionalista y separatista catalán que protagonizó un golpe contra la democracia y cuyo máximo dirigente es un prófugo de la Justicia. Las mismas cuestiones que se señalan en nuestra denuncia han sido expresadas en el informe oficial sobre la proposición de Ley de Amnistía elaborado por los Letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de España.

El PSOE ha pactado la gobernabilidad de España con un prófugo de la justicia. Este pacto es profundamente antieuropeo y el despliegue de su contenido atenta gravemente contra los valores democráticos de la Unión, especialmente contra el Estado de Derecho (art. 2 del TUE) que somete a todos los ciudadanos a la ley, incluidos los políticos.

1. En democracia no caben pactos políticos con quienes han violado la ley y se han fugado de un Estado miembros para evitar la acción de la justicia. Recordemos que Puigdemont está acusado por los tribunales españoles de graves delitos de desobediencia y malversación, además de terrorismo. Walter Halstein, primer presidente de la Comisión Europea (1958-1967), subrayó que la Unión es una “*comunidad de Derecho*”, concepto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido confirmando de manera consistente en su jurisprudencia desde 1983, y que alude directamente al principio de respeto al Estado de Derecho.
2. Este ha sido un pacto vergonzoso, negociado de espaldas a los ciudadanos españoles y al margen de las instituciones democráticas españolas, contra el principio de transparencia que rige la acción de la Unión Europea y sus Estados miembros en su acción política y es un elemento fundamental de un sistema democrático. El ejercicio del poder de manera opaca, contribuye erosionar las instituciones democráticas. La acción de los políticos debe ser necesariamente transparente, a fin de asegurar los máximos niveles de control del poder por parte de los ciudadanos. Esto está directamente relacionado con la salud del Estado de Derecho, la transparencia debe garantizar que las leyes se negocian (en todas sus fases) y adoptan bajo es escrutinio público en las instituciones electas para ello, y que éstas leyes sean generales y se apliquen por igual a todos los ciudadanos.
3. Una Ley de Amnistía hecha a medida de los socios del PSOE. El pacto entre PSOE y Junts incluye una Ley de Amnistía para borrar los delitos cometidos por los políticos socios del nuevo gobierno. Delitos cometidos antes y después de la consulta y referéndum ilegales de 2014 y de 2017, incluso aquellos hechos delictivos ya juzgados y/o en proceso. Estos delitos incluyen la malversación y actos de terrorismo (sobre los que no haya aun sentencia firme), ambos incluidos en las lista de delitos graves incluidos en el artículo 83 del TFUE y sobre los que la Unión Europea tiene competencias para establecer criterios y sanciones mínimas.
4. Otorgar amnistía a quienes perpetraron el golpe de estado de 2017 es un fraude democrático mayúsculo y es contrario a la Constitución. El propio presidente del gobierno y todos los miembros de su gabinete aseguraron, antes de necesitar los votos de Junts, que la amnistía no cabe en el marco constitucional español y que no la concederían, ya que supondría “eliminar el poder judicial”.
5. El proyecto de Ley de Amnistía también fue ocultado a las instituciones europeas, en violación flagrante del principio de cooperación leal entre Estados miembros e Instituciones europeas (art. 4.3 del Tratado de la Unión Europea). Ante la protesta masiva de miles de ciudadanos y de todas asociaciones de juristas de España que se dirigieron a las instituciones europeas mostrando su rechazo a la amnistía, el jueves 8 de noviembre de 2023, el Comisario de Justicia, Didier

Reynders, solicitó por carta al gobierno de España detalles sobre el alcance temporal, material y personal de la ley de amnistía que estaban negociando el PSOE y sus socios. En su respuesta, ese mismo día, el ministro español de la presidencia, relaciones con las cortes y memoria democrática toda información sobre la norma que estaban negociando, para presentarla él mismo en nombre de su grupo parlamentario el lunes siguiente, 13 de noviembre de 2023.

6. Sobre la tramitación de la Ley de Amnistía, cabe destacar que el motivo por el que el PSOE optó por una proposición de ley de su grupo político fue para eludir la consulta perceptiva (al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal) que establece la legislación española para propuestas legislativas del Gobierno (a fin de garantizar la transparencia y la participación de la ciudadanía en el proceso). En su informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea 2023, la Comisión subraya las dudas que existen sobre algunas prácticas procedimentales en las Cortes, incluyendo la falta de consulta pública para propuestas legislativas de los grupos políticos y el uso excesivo de los procedimientos de urgencia para legislar. En el caso del proyecto de Ley de Amnistía se han utilizado ambas vías para su tramitación.
7. Sobre los delitos de malversación (corrupción) del proyecto de Ley de Amnistía, cabe destacar que los delitos de corrupción están expresamente mencionados en los tratados (artículo 83 del TFUE) como delitos de especial gravedad por sus repercusiones. Amnistiar estos delitos, especialmente cuando los cometen políticos, y hacerlo a cambio de votos, tiene un impacto extraordinariamente negativo para la Unión a corto, medio y largo plazo. La Comisión Junker ya lo advirtió cuando, en enero de 2019, alertó a las autoridades rumanas que la despenalización y amnistía a políticos de algunos delitos de corrupción suponía “*exportar*” sus conflictos internos a la Unión Europea, además de “*un retroceso*” para el estado de Derecho. La lucha contra la corrupción es uno de los aspectos centrales de la defensa del Estado de Derecho. Además, amnistiar delitos de corrupción va en sentido radicalmente contrario a la reciente propuesta que de Directiva de lucha contra la corrupción se están negociando en estos momentos entre el Parlamento Europeo (y el Consejo)¹. De materializarse esta amnistía, se ahondaría en la deriva laxista que, por motivos políticos, el gobierno de España inició con las rebajas de penas ya adoptada por España en 2022 (Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre), rebajas que fueron ampliamente criticada por la sociedad civil (tal y como refleja el informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea de 2023).
8. Respecto a los delitos de terrorismo, la Ley de Amnistía pretende borrar aquellos sin sentencia firme. Es decir, todos los que están siendo investigados en estos momentos en relación a los hechos delictivos posteriores al intento de golpe de estado de 2017. Este tipo de delitos también están expresamente mencionados en los tratados (artículo 83 del TFUE) como delitos de especial gravedad por sus repercusiones. Amnistiar y dejar sin efecto los procesos penales en curso para dichos delitos es, además, radicalmente contrario a la Directiva europea de lucha contra el terrorismo.
9. Comisiones parlamentarias de investigación para señalar y represaliar a jueces y funcionarios que en cumplimiento de las atribuciones establecidas por la ley investigaron y encausaron las acciones delictivas de los políticos, al amparo de la legislación española y europea. Esto no tiene precedentes en la Europa democrática y responde solo a la voluntad de mantenerse en el poder a toda costa, incluso a costa del desprestigio del sistema judicial español. No se ha visto en toda la historia de la Unión Europea una injerencia tan flagrante en la independencia judicial y de las fuerzas de seguridad.
10. Dos cuestiones en paralelo: por exigencias de Junts, el gobierno eliminó la cláusula para dejar en suspenso la aplicación de leyes sometidas a cuestión prejudicial que contenía la versión inicial del recientemente aprobado Real Decreto-ley 6/2023, ello a fin de consagrar en la legislación española esta obligación europea. Además, el gobierno se habría comprometido a transferir las competencias de inmigración a Cataluña. Ambas cuestiones son contrarias a los compromisos del

¹

gobierno contraídos con Europa (la primera en el marco de del plan de recuperación y el compromiso de agilizar y asegurar una mejor coordinación del sistema migratorio, la segunda en el marco del reciente pacto europeo de inmigración y asilo al poner en riesgo esa transferencia de competencias el establecimiento de un enfoque común europeo en materia de migración y asilo).

La propuesta de Directiva 2023/0135(COD) incluye la obligación de los Estados miembros de establecer penas de prisión de al menos 5 años para los casos graves (agravadas si el infractor es un alto cargo), multas, destitución, o inhabilitación de quienes cometieron los delitos, además de una prescripción de 10 años.

ANTI-EUROPEAN SPIRIT OF THE PACT BETWEEN PSOE AND JUNTS.

The Spanish civic associations that organized the Cibeles18N rally, in which more than a million citizens gathered, have filed a complaint with the EP Petitions Committee for the approval of an amnesty law that violates the principle of equality of all citizens before the law, invalidates the action of the Courts of Justice and grants impunity to criminals in exchange for their votes. Today we also want to point out the anti-European spirit and contrary to European values, including the rule of law, of the pact signed between the Spanish socialists and the Catalan ultra-nationalist and separatist party that staged a coup against democracy and whose top leader is a fugitive from Justice. The same issues that are pointed out in our complaint have been expressed in the official report on the proposed Amnesty Law prepared by the Lawyers of the Justice Commission of the Congress of Deputies of Spain.

The PSOE has agreed on the governability of Spain with a fugitive from justice. This pact is deeply anti-European and the unfolding of its content seriously undermines the democratic values of the Union, especially the rule of law (art. 2 of the TEU), which requires that all citizens to the law, including politicians.

1. In democracy there is no room for political pacts with those who have violated the law and have fled a Member State to avoid justice. Let us remember that Puigdemont is accused by the Spanish courts of serious crimes of disobedience and embezzlement, as well as terrorism. Walter Hallstein, first president of the European Commission (1958-1967), stressed that the Union is a “community of law”, a concept that the Court of Justice of the European Union has been consistently confirming in its jurisprudence since 1983, and which directly alludes to the principle of respect for the rule of law.
2. This has been a shameful pact, negotiated in dark rooms hidden from the Spanish citizens and outside the Spanish democratic institutions, against the principle of transparency that governs the political action of the European Union and its Member States and is a fundamental element of any democratic system. The exercise of power in an opaque manner contributes to the erosion of democratic institutions. The action of politicians must necessarily be transparent, in order to ensure the highest levels of control of power by citizens. This is directly related to the health of the rule of law, transparency must guarantee that laws are negotiated (in all their phases) and adopted under public scrutiny in the elected institutions, and that these laws are general and applied by equal to all citizens.
3. An Amnesty Law tailored to PSOE political allies. The pact between PSOE and Junts includes an Amnesty Law to erase crimes committed by the political partners of the new government. Crimes committed before and after the illegal consultation and referendum of 2014 and 2017, including those criminal acts already tried and/or under criminal process. The crimes subject to the Amnesty Law include embezzlement and acts of terrorism (even those on which there has not yet been a final ruling), both included in the list of serious crimes included in article 83 of the TFEU and for which the European Union has powers to establish criteria and minimum sanctions.
4. Granting amnesty to those who perpetrated the 2017 coup d'état is a major democratic fraud and is contrary to the Constitution. The president of the government himself and all the members of his cabinet assured publically, before needing the votes of Junts, that the amnesty does not fit into the Spanish constitutional framework and that they would not grant it, since it would mean "eliminating the judicial power."
5. The draft Amnesty Law was also hidden from the European institutions, in flagrant violation of the principle of loyal cooperation between Member States and European Institutions (art. 4.3 of the Treaty on the European Union). Faced with the massive mobilization of thousands of citizens and all associations of jurists in Spain who addressed the European institutions showing their rejection of such an amnesty, on Thursday, 8 November 8, 2023, the Commissioner for Justice, Didier Reynders, requested by letter to the government of Spain details about the temporal, material and personal scope

of the amnesty law that the PSOE and its partners were negotiating. In his response, that same day, the Spanish Minister of the Presidency, Relations with the Courts and Democratic Memory did not provide any kind of information about the law under negotiation just to present it himself, on behalf of his parliamentary group, the following Monday, 13 November 2023.

6. Regarding the tabling of the Amnesty Law in the Spanish Congress, it should be noted that the reason why the PSOE opted to resent the bill through its political group was to avoid perceptive consultation (to the Council of State, the General Council of the Judiciary and to the Fiscal Council) established by Spanish legislation for any legislative proposal from the Government (being this consultation a fundamental element to guarantee transparency and citizen participation in the process). In its report on the Rule of Law in the European Union 2023, the Commission highlights the doubts that exist about some procedural practices in the Cortes in regard to the lack of public consultation for legislative proposals from political groups and the excessive use of the procedures of urgency clauses in the adoption of legislation. In the case of the Amnesty Law project, both avenues have been used for its adoption.

7. Regarding the crimes of embezzlement (corruption) of the Amnesty Law, it should be noted that the crimes of corruption are expressly mentioned in the treaties (article 83 of the TFEU) as crimes of special gravity due to their repercussions. Amnestying these crimes, especially when they are committed by politicians, and doing so in exchange for votes, has an extraordinarily negative impact for the Union in the short, medium and long term. The Junker Commission already warned about this when, in January 2019, it alerted the Romanian authorities that the decriminalization and amnesty of politicians for some corruption crimes meant "exporting" their internal conflicts to the European Union, in addition to "a setback" for the rule of law. The fight against corruption is one of the central aspects of the EU endeavour in defending the rule of law. Furthermore, amnesty for corruption crimes is radically contrary to the recent proposal for a directive on the fight against corruption that is being negotiated between the European Parliament (and the Council). If this amnesty materializes, it would deepen the backwards drift that, for political reasons, the Spanish government began with the reductions in penalties already adopted by Spain in 2022 (Organic Law 14/ 2022, of December 22), reductions that were widely criticized by civil society (as reflected in the 2023 report on the Rule of Law in the European Union).

8. Regarding the crimes of terrorist, the Amnesty Law seeks to erase those without a final ruling. That is, all those who are currently being investigated in relation to the criminal acts following the attempted coup d'état in 2017. These types of crimes are also expressly mentioned in the treaties (article 83 of the TFEU) as crimes of special gravity for its repercussions. Amnestying and annulling ongoing criminal proceedings for such crimes is, furthermore, radically contrary to the European Directive on the fight against terrorism.

9. Parliamentary investigation commissions to point out and retaliate against judges and officials who, in compliance with the powers established by law, investigated and prosecuted the criminal actions of politicians, under the Spanish and European legislation. This is unprecedented in democratic European Union and responds only to the will to remain in power at all costs, even at the cost of discrediting the Spanish judicial system. Such flagrant interference in the independence of the judiciary and the security forces has not been seen in the entire history of the European Union.

10. Two issues in parallel: due to Junts' demands, the government eliminated the clause to enshrine in Spanish law the obligation to suspend the application of laws subject to preliminary rulings that was contained in the initial version of the recently approved Royal Decree-Law 6/2023. In addition, the government would have committed with Junts to the transferring of the migration state powers to Catalonia. Both issues are contrary to the government's commitments with the European Union (the first within the framework of the recovery plan and the commitment to streamline and ensure better coordination of the national migration system, the second within the framework of the recent European pact on immigration and asylum, by putting at risk this transfer of powers the establishment of a common European approach to migration and asylum).

